Bogotá D. C., 16 de septiembre de 2026

Doctores
H.S. Sara Jimena Castellanos, Presidente Comisión Tercera Constitucional Permanente - Senado de la República
H.S. Diela Liliana Benavides Solarte, Presidente Comisión Cuarta Constitucional Permanente - Senado de la República
H.S. Alfredo Ape Cuello Baute, Presidente Comisión Tercera Constitucional Permanente - Cámara de Representantes
H.S. Alexander Harley Bermúdez Lasso, Presidente Comisión Cuarta Constitucional Permanente - Cámara de Representantes

Referencia: Informe de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República al Proyecto de Ley No. 111 de 2026 Senado y 152 de 2026 Cámara "POR LA CUAL SE DECRETA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y LEY DE APROPIACIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2027".

Distinguidos Senadores y Representantes:

Por medio de la presente nos permitimos rendir el informe de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República, con relación al Proyecto de Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2027 presentado a consideración del Congreso de la República por el señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, en lo correspondiente a los sectores de su competencia: Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Policía, Comercio, Industria y Turismo, y Transporte, así como sus entidades adscritas y vinculadas.

El presente informe recoge la información, los requerimientos y las recomendaciones presentadas por las carteras y entidades en la sesión ordinaria mixta celebrada el 14 de septiembre de 2026, convocada mediante proposiciones 7 y 8 de 2026 de los senadores María Irma Noreña Arboleda y Antonio José Correa Jiménez.

Lo anterior, con el objeto de que las recomendaciones aquí formuladas sean consideradas por el señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, por los coordinadores ponentes y por las Comisiones Económicas del Congreso de la República durante la elaboración de la ponencia, la discusión de las apropiaciones y el primer debate del proyecto de presupuesto. La aprobación del monto global no agota la competencia del Congreso para revisar la composición sectorial del gasto, formular recomposiciones y exigir que las partidas respondan a necesidades demostradas, fuentes identificadas y resultados verificables, de conformidad con el artículo 4° de la Ley 3ª de 1992, los artículos 342 y 346 de la Constitución Política y el Estatuto Orgánico del Presupuesto.

Atentamente,

H.S. MARÍA IRMA NOREÑA ARBOLEDA
Senadora de la República

H.S. ANTONIO JOSÉ CORREA JIMÉNEZ
Senador de la República

H.S. LUIS ALFONSO MEJIA
Senador de la República

H.S. HONORIO HENRÍQUEZ PINEDO
Senador de la República

INFORME AL PROYECTO DE LEY No.111 DE 2026 SENADO Y 152 DE 2026 CÁMARA "POR LA CUAL SE DECRETA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y LEY DE APROPIACIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2027"

COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL PERMANENTE SENADO DE LA REPÚBLICA

Esta comisión, según lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 3ª de 1992 y los artículos 342 y 346 de la Constitución Política de Colombia, debe rendir informe sobre el Presupuesto General de la Nación en relación con los temas de su conocimiento a las Comisiones Económicas Terceras y Cuartas. Los temas de la Comisión Segunda versan principalmente sobre política internacional, defensa nacional y fuerza pública, tratados públicos, carrera diplomática y consular, comercio exterior e integración económica, y asuntos de honores y monumentos públicos; en consecuencia, el presente informe se concentra en los sectores de Relaciones Exteriores, Defensa y Policía, Comercio, Industria y Turismo, y Transporte, junto con las entidades adscritas que comparecieron (Migración Colombia, DIAN y Agencia Nacional de Infraestructura ANI).

1. GENERALIDADES DE LA COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2027

El Gobierno Nacional presentó inicialmente un proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 por $575,7 billones, con una brecha de financiamiento reconocida de $30,2 billones dependiente de una ley de financiamiento aún no aprobada. Por inconsistencias frente al Marco Fiscal de Mediano Plazo y al Estatuto Orgánico del Presupuesto, las Comisiones Económicas Conjuntas aprobaron la devolución del proyecto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El proyecto ajustado fue radicado por el nuevo Ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, tras la devolución aprobada por las Comisiones Económicas Conjuntas, y debatido en las sesiones conjuntas del 1 y 2 de septiembre de 2026. Asciende

a $634,9 billones, esto es, $59,3 billones por encima del proyecto inicial, con un crecimiento del 14,2 % frente al Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026. Su composición es la siguiente:

Cuadro 1. Composición del PGN 2027

CONCEPTO	2027 (proyecto)	Participación	Variación frente a 2026
Funcionamiento	$392,6 billones	61,8 %	+$34,5 billones (+9,6 %)
Servicio de la deuda	$155,0 billones	24,4 %	+$55,0 billones (+55,0 %)
Inversión	$87,0 billones	13,7 %	−$1,4 billones (−1,6 %)
TOTAL	**$634,9 billones**	**100 %**	**+$88,0 billones (+16,1 %)**

Fuente: Exposición del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ante las Comisiones Económicas Conjuntas.

El Ministro de Hacienda sostuvo que el incremento de $88,0 billones frente a la vigencia 2026 no corresponde a nuevo gasto, sino a la incorporación de partidas que el proyecto inicial y las vigencias anteriores dejaron desfinanciadas, cerca de $59 billones concentrados en gastos de personal, pensiones, salud, educación superior y servicio de la deuda. Esta afirmación es relevante para el examen de las Comisiones Económicas, por cuanto significa que el mayor aforo no habilita espacio fiscal nuevo: el 62,5 % del incremento se explica por el servicio de la deuda y la inversión decrece en términos nominales.

Dentro de este marco macrofiscal se inscriben las solicitudes de adición formuladas por los sectores de competencia de la Comisión Segunda, que ascienden a $10,6 billones en funcionamiento e inversión, sin contar los $15,3 billones adicionales requeridos por la ANI para servicio de la deuda, y que se relacionan en detalle en los numerales 3 y 4 de este informe.

2. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN SEGUNDA

En cumplimiento del artículo 4º de la Ley 3ª de 1992, la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado celebró sesión ordinaria mixta el lunes 14 de septiembre de 2026, a partir de las 10:00 a. m., autorizada mediante Resolución 001 del 14 de septiembre de 2026. La sesión, de carácter estrictamente informativo y sin votaciones, tuvo por objeto recopilar la información sobre programas, apropiaciones, ejecuciones presupuestales, necesidades y recomendaciones de las carteras de su competencia con ocasión del trámite del PGN 2027.

2.1. Asistencia y delegaciones

El único jefe de cartera que asistió personalmente fue el Ministro de Relaciones Exteriores, Omar Nicolás Bula Escobar. Las demás carteras delegaron su representación así:

ENTIDAD	DELEGACIÓN
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Sin delegación

ENTIDAD	DELEGACIÓN
Ministerio de Relaciones Exteriores	Omar Nicolás Bula Escobar, Ministro (asistencia personal)
Ministerio de Defensa Nacional	BG Rudy Smith Arias Rodríguez, Viceministro de Estrategia y Planeación
Ejército Nacional	BG Rodolfo Morales Franco
Fuerza Aérea	MG Juan Francisco Mosquera
Armada Nacional	MG Rafael Olaya Quintero
Policía Nacional	MG Norberto Mujica Jaime, Subdirector General
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	Manuel Alejandro Naranjo Giraldo, Viceministro de Desarrollo Empresarial
Ministerio de Transporte	Delegó en la ANI: Dora Nuri Noguera, Javier Vergara, Adriana Barreño y Miguel Landines
Departamento Nacional de Planeación	Jacqueline Andrade Zapata

El llamado a lista registró seis senadores en el recinto y tres virtuales, con lo cual se verificó quórum decisorio. Tras más de tres horas y media, la Comisión se declaró en sesión permanente.

3. INFORME POR SECTORES DE COMPETENCIA DE LA COMISIÓN SEGUNDA

3.1. Sector: Relaciones Exteriores

3.1.1. Ministerio de Relaciones Exteriores y Fondo Rotatorio

El Ministerio de Relaciones Exteriores es el único sector de competencia de esta Comisión que no solicitó recursos adicionales. El Canciller manifestó expresamente que la cartera se ajustará al techo fijado por el Ministerio de Hacienda.

- **Reducción cercana al 18,5 % frente al marco de gasto**, equivalente a $383.000 millones para el Ministerio y el Fondo Rotatorio, y $458.000 millones para el sector incluyendo a Migración Colombia.
- **Apropiación total de $1,63 billones**, tres puntos porcentuales por debajo del presupuesto vigente de 2026.
- **Distribución de la brecha:** cerca de $81.000 millones en el Ministerio y $302.689 millones en el Fondo Rotatorio, concentrados en gastos de funcionamiento. Los recursos de inversión permanecen intactos.

El Canciller presentó seis metas estratégicas: modernización y transformación digital de la función de relaciones exteriores con gestión por resultados; defensa de la soberanía nacional y de las fronteras; contribución a la seguridad hemisférica y lucha contra el narcoterrorismo y el crimen transnacional organizado; reconstrucción de alianzas estratégicas con naciones que comparten democracia y libertades; competitividad económica y tecnológica con diplomacia comercial proactiva y atracción de inversión

extranjera; y cooperación internacional orientada al interés nacional, con evaluación de todos los programas bilaterales y multilaterales.

Diagnóstico presentado sobre la situación financiera y operativa de la cartera:

- Deterioro de la sostenibilidad financiera del Fondo Rotatorio, que hoy cubre cerca del 77 % del presupuesto operativo frente a una proporción histórica del 50 %, con tendencia deficitaria de recaudo iniciada hace año y medio.
- Modelo de pasaportes con reducción de tarifas sin estudios de impacto y sin actualización por IPC durante tres años, sumado a incertidumbre jurídica sobre su continuidad.
- Arquitectura tecnológica fragmentada, con 37 sistemas de información sin interoperabilidad.
- Entre el 90 % y el 97 % de los recursos del PGN son absorbidos por gastos de personal, y cerca del 85 % de las adquisiciones de bienes y servicios realizadas por contratación directa.
- Expansión de embajadas y consulados proyectada sin el correspondiente respaldo financiero.

Cómo apuestas para 2027 se plantearon austeridad inteligente, eliminación de duplicidades, equilibrio financiero del Fondo Rotatorio mediante actualización de tarifas, modelo gerencial con tablero de control y medición de rendimiento por embajada y consulado, y priorización de la inversión en atención al ciudadano, servicios consulares y de pasaportes, desarrollo fronterizo y servicios digitales. En materia de emergencia, la Cancillería creó un centro de urgencia en menos de 24 horas tras el terremoto del 10 de agosto y canalizó ayuda de más de 20 países.

Se resalta del informe rendido por este sector que el déficit presupuestal que se presenta para la vigencia 2026, cercano a los $2 Billones, contemplados para el funcionamiento y priorización de:

1. Fuerza Pública – (Operacional, logístico y de servicios) - $497.238 Millones
2. Sanidad - (Prestación y sostenimiento de Servicios de Salud) - $960.544 Millones
3. Pensional – (Cumplimiento de obligaciones Institucionales – Mesadas pensionales) - $495.111 Millones

Consecuencia de ello, es el aumento de la delincuencia, la reorganización de las estructuras criminales y el aumento de delitos, hectáreas de cultivos ilícitos y riesgos a los que han sido sometidos no solo la población colombiana sino las fuerzas militares.

Sumado a esto, según reporte de los proyectos de Inversión del Sector Defensa a Junio de 2026, hay una apropiación de recursos por valor de $3,67 Billones, de los cuales hay proyectos que se encuentran en estado de rezago y parálisis de ejecución, por lo que hay que activar su ejecución para el segundo semestre de 2026 de la presente vigencia y agilizar las condiciones de contratación para dejar comprometido estos recursos, en especial lo destinado para el fortalecimiento, gestión y capacidades para contrarrestar

incidentes en ciberdefensa y ciberseguridad para las FFMM a nivel nacional entre otros proyectos, que en la actualidad están demandando recursos para atender esas necesidades operacionales y de inversión que permitirán contrarrestar las acciones terroristas y criminales que se vienen presentando en el país.

3.1.2. Unidad Administrativa Especial Migración Colombia

CONCEPTO	2026	2027 (proyecto)	Variación
Funcionamiento	$234.000 mill.	$271.000 mill.	+15 %
Inversión	$78.633 mill.	$54.000 mill.	−20 %

Fuente: intervención del Director de Migración Colombia, José Luis Castañeda, sesión del 14 de septiembre de 2026.

Del componente de funcionamiento, $220.000 millones corresponden a gastos de personal, $47.000 millones a bienes y servicios, $2.500 millones a transferencias y $882 millones a tributos, multas y sanciones. La entidad opera 16 puestos aéreos, 10 terrestres, 14 marítimos, 15 fluviales, 3 móviles y 30 centros facilitadores, con un flujo migratorio proyectado para 2026 cercano a 23 millones de personas (+5 %).

Necesidades presupuestales expuestas:

- **Planta de personal:** adición de $48.259 millones para pasar de 1.684 funcionarios actuales a la planta ideal de 2.265. Se reportó insuficiencia de personal de entre 35 % y 40 % en las cinco principales ciudades (Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali y Barranquilla), que concentran el 90 % del flujo migratorio, con tiempos de espera de hasta 3 y 4 horas en Medellín.
- **Infraestructura tecnológica:** $122.000 millones. El sistema BIOMIG data de 2017, la entidad carece de unidad de respaldo de datos y opera más de 14 sistemas de interoperabilidad.
- **Deportaciones y expulsiones:** $2.100 millones; se informó que el rubro quedó con una apropiación residual de $237.000 pesos.
- **Infraestructura física:** más de 80 instalaciones a cargo con solo $4.700 millones asignados.
- **Terremoto del 10 de agosto:** la sede de Pereira quedó inservible y requiere reconstrucción total; la atención se redirige transitoriamente a Manizales y Armenia. También se reportan afectaciones y proyectos pendientes en Paraguachón, San Andrés y Cartagena.

3.2. Sector: Defensa Nacional y Policía

3.2.1. Diagnóstico de la amenaza

- 8 grupos armados organizados narcoterroristas y 133 estructuras de delincuencia organizada, con 29.062 integrantes en armas frente a 27.000 en 2002 sumadas todas las estructuras de la época y un incremento de 2.000 solo entre enero y junio de 2026.
- Presencia en 643 municipios, más del 60 % del territorio nacional.

- 261.000 hectáreas de coca según el último reporte disponible (2024), concentradas en Catatumbo, Nariño, Cauca y Putumayo, con producción potencial de 3.000 toneladas y 920 toneladas interdictadas.
- 14.780 homicidios, 13.835 casos de extorsión y 454 víctimas de secuestro en el periodo reportado.
- 1.287 ataques con drones contra la fuerza pública, 344 con afectaciones y 25 uniformados muertos.

3.2.2. Situación presupuestal estructural

- Entre 2018 y 2026 el presupuesto del sector creció 121 % en precios corrientes, pero solo 36 % en precios constantes. El sector representa cerca del 3,3 %–3,4 % del PIB, mientras las rentas criminales equivalen al 4,08 % del PIB.
- Alta inflexibilidad del gasto: 78 % en gastos de personal, 14 % en funcionamiento (incluida inversión), 6 % en sentencias y multas y 2 % en operación comercial.
- En 2026 se produjo una contracción de $232.185 millones, porque la nivelación salarial de suboficiales en grados subalternos se financió con el mismo presupuesto de la vigencia y sin adición, afectando el plan de ascensos y generando compresión salarial (soldado profesional $2.451.000 frente a cabo tercero o sargento segundo $2.545.000).
- Deuda del subsistema de salud de las Fuerzas Militares y la Policía: pasó de $200.000 millones en 2022 a $960.000 millones en 2026, con cerca de 1.200.000 beneficiarios.

En materia de ejecución, en 2025 sobre $60 billones se registraron compromisos del 100 % y obligaciones del 92 %. En 2026, sobre $66 billones, compromisos del 68 % y obligaciones del 60 %. Las reservas de 2025 alcanzaron 84,33 % en funcionamiento y 55,86 % en inversión, explicadas principalmente por el proyecto Fortaleza ($340.000 millones), congelado por un litigio con una empresa canadiense en un contrato de gobierno a gobierno. Las cuentas por pagar se ejecutaron al 100 %.

Para 2026 el sector reportó un déficit estructural de $7 billones y un déficit priorizado de $1,9 billones por rubros no presupuestados (servicios públicos, seguros, combustibles y movilidad operacional, dotación, gastos reservados de inteligencia y mantenimiento), más $495.000 millones para mesadas pensionales y asignaciones de retiro.

3.2.3. Proyecto de presupuesto 2027

CONCEPTO	Necesidad estructural	Proyecto PGN 2027	Déficit total	Déficit priorizado 2027
Funcionamiento	$91,0 billones	$68,2 billones	$22,8 billones (priorizado)	$2.9 billones
Inversión	$21,4 billones	$6,3 billones	$15,1 billones	$0,8 billones
Servicio de la deuda	$2,6 billones	$0,3 billones.	$2,3 billones	$0
TOTAL	**$115,0 billones**	**$74,8 billones**	**$40,2 billones**	**$3,7 billones**

Fuente: intervención del Viceministro de Estrategia y Planeación, BG Rudy Smith Arias Rodríguez, sesión del 14 de septiembre de 2026.

La distribución del presupuesto asignado corresponde a $54,9 billones en unidades centralizadas, $20,9 billones en la Policía Nacional incluyendo sanidad y educación, y $16,8 billones en el Ejército Nacional; el 73,4 % se ubica en el sector central y el 26,6 % en el descentralizado (GSED).

De los $6,3 billones de inversión, $5,2 billones son inflexibles por corresponder a documentos CONPES ya comprometidos: 4077 (proyecto Fortaleza); 4078 (SIDEN, $9,38 billones, que aun así deja una brecha de capacidad de $95 billones); 4155 (aeronaves de superioridad aérea: de 24 proyectadas sólo se alcanzan 17, con brecha de 7 para 2028); y 4187 (armas, $14 billones ejecutables entre 2027 y 2034, con brecha de $35 billones). Se advirtió que los efectos operacionales de la inversión extraordinaria solo se verán a partir de 2028-2031, mientras la inversión ordinaria equivale al 0,1 % del PIB y se destina a dotación (30 %), mantenimiento mayor (26 %), movilidad aérea (13 %), infraestructura (9 %) e inteligencia y otros (3 %). Las horas de vuelo cayeron 47 % en una década: la Fuerza Aérea pasó de 75.000 a 43.000 horas y la aviación del Ejército de 30.000 a 16.000.

En cooperación internacional, el principal socio sigue siendo Estados Unidos, con apoyos que pasaron de USD 165 millones en 2004 a USD 38 y 37 millones en 2025 y 2026, respectivamente. Se mencionaron los acuerdos de Barranquilla y la adhesión de Colombia al esquema de coalición regional contra los carteles como vías para aumentar los recursos FMF.

En cuanto al terremoto del 10 de agosto, el sector reportó 561 afectaciones, de las cuales 423 corresponden a infraestructura física de las Fuerzas Militares, la Policía y la Defensa Civil, por $261.492 millones; sumadas las capacidades duales para atención de emergencias e incendios forestales ($23.793 millones), el total asciende a $285.285 millones. Se solicitan $10.000 millones para 2026 y $50.000 millones para 2027.

Adicionalmente sobre este sector, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha advertido que cerrar la brecha histórica de capacidades militares requiere inversiones masivas para actualizar equipos obsoletos. Las prioridades ya trazadas incluyen:

- **Artillería de campaña**: Financiar la adquisición de sistemas de obuses de 105 milímetros.
- **Infantería mecanizada**: Compra de setenta (70) vehículos blindados para el transporte seguro de personal en zonas de orden público.
- **Control fluvial y marítimo**: La Armada Nacional, requiere patrulleras oceánicas, patrulleras de costa, remolcadores y botes de apoyo fluvial, buscando elevar el control de los ríos nacionales, que históricamente ha estado por debajo de un cincuenta por ciento (50%).

Ya, sobre Seguridad Ciudadana y Nuevas Tecnologías, debemos advertir que el enfoque de inversión ordinaria no sólo apunta a la guerra convencional, sino a mitigar los delitos de alto impacto urbano, rural y las nuevas tácticas criminales:

- **Proyecto escudo anti drones**: Una asignación prioritaria aproximada de $2,8 billones orientada a contrarrestar los ataques con drones cargados de explosivos por parte de grupos armados ilegales.

- **Inteligencia artificial y vigilancia**: Compra de plataformas de software e inteligencia electrónica para la detección de amenazas en tiempo real.

- **Seguridad pública y pie de fuerza**: Cerca de $468.000 millones destinados exclusivamente a la convivencia, prevención y el aumento del pie de fuerza en los municipios con mayores problemas de orden público.

Por ello es necesario adicionar el presupuesto de esta cartera.

3.3. Sector: Comercio, Industria y Turismo

- El sector representa el 0,29 % del PGN ($2.900 por cada millón del presupuesto nacional) y ha crecido a tasas cercanas al 0,2 % frente a una inflación en torno al 5 %, lo que implica decrecimiento en términos reales.
- El decreto de emergencia cobija 16 departamentos, pero la afectación económica se concentra en Risaralda, Valle del Cauca, Caldas, Chocó y Quindío y, en menor medida, Cauca. Las reservas turísticas en el Eje Cafetero y el Valle cayeron de niveles de 75 %–78 % a 20 %–25 %.
- Con Confecámaras y las entidades territoriales se consolidó una caracterización de cerca de 45.000 registros empresariales: el 24,7 % no puede operar y el 44,6 % presenta afectación crítica o grave.

Solicitud presupuestal: sobre una asignación de $1,27 billones para 2027, el sector solicita una adición de $400.000 millones, discriminados así: $172.000 millones para garantías de crédito y transferencias directas a mipymes, informales y micronegocios (capital semilla y créditos blandos), y $228.000 millones para líneas de crédito y apoyo a través de Bancóldex y el Fondo Nacional de Garantías, con efecto multiplicador sobre el sistema financiero. Se informó, además, que se gestionan recursos privados y que hay decretos legislativos en validación con el Ministerio de Hacienda, entre ellos incentivos tributarios a tiquetes aéreos.

Intervenciones diferenciadas en curso: en Chocó, un plan de reactivación con 14 iniciativas financiadas con donaciones del sector privado y recursos de Fontur; en Quindío, reactivación turística en alianza con la Federación Nacional de Cafeteros, dado que el departamento depende entre el 70 % y el 80 % del turismo; y en Valle del Cauca, promoción y transferencias directas a informales y micronegocios con la Gobernación.

El Ministerio comprometió la intervención de Fontur en el parque El Vergel (Risaralda) y, dentro del programa de pueblos mágicos con la Fundación Santo Domingo, la selección de Marsella y Santa Rosa de Cabal en Risaralda. Igualmente, acogió la solicitud de conformar una mesa de trabajo específica para Risaralda (Pereira y Dosquebradas) y reconoció dificultades de articulación con la Gobernación y las alcaldías. En materia de comercio

exterior, se anunció la convocatoria de un comité de asuntos aduaneros para evaluar la importación de azúcar y etanol desde Bolivia y la solicitud de salvaguardia, así como una revisión integral de los acuerdos comerciales que será presentada a esta corporación.

3.4. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN

CONCEPTO	2026	2027 (proyecto)	Solicitado 2027
Presupuesto total	$3,7 billones	$3,8 billones	$4,6 billones
Funcionamiento	98 %	98,5 %	—
Inversión	2 %	1,5 %	—
Brecha	—	**$788.000 millones**	—

Fuente: intervención de Andrés Felipe Velásquez, DIAN, sesión del 14 de septiembre de 2026.

Más del 85 % del rubro de funcionamiento corresponde a nómina, para más de 16.500 funcionarios. En 2026 la entidad recibió una adición superior a $100.000 millones en junio, un congelamiento cercano a $17.800 millones y un traslado de $7.700 millones, con ejecución de funcionamiento superior al 60 %.

La entidad expuso una crisis de talento humano derivada de la tensión entre el concurso de méritos anual ordenado por decreto ley y la convención colectiva suscrita con 58 sindicatos, que lo prevé cada tres años, con un volumen de tutelas, desacatos y recursos de reposición que ha desbordado su capacidad administrativa y financiera; y un rezago superior a tres años en el plan de modernización trazado en el CONPES de diciembre de 2020, financiado con el BID y vigente hasta el 24 de diciembre de 2028.

Necesidades: reconstrucción de las direcciones seccionales destruidas por el terremoto (la de Pereira quedó colapsada, con afectaciones también en Cali, Manizales, Buenaventura y Quibdó); plan anual antievasión y disposición de mercancías aprehendidas y decomisadas; costos fijos de funcionamiento; transferencias, incapacidades, organismos internacionales y sentencias; y financiación del crecimiento de planta.

Asuntos de competencia directa de la Comisión Segunda: se encuentran pendientes de ratificación tratados de intercambio de información tributaria y acuerdos para evitar la doble imposición, en particular la convención multilateral (MLI) contra la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios, suscrita hace más de ocho años. La Comisión considera prioritario impulsar su trámite.

3.5. Sector: Transporte - Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)

El Ministerio de Transporte delegó su representación en la ANI, cuyo portafolio comprende 43 concesiones carreteras, 56 portuarias, 4 aeroportuarias (14 aeropuertos), 2 férreas y 1 fluvial (restauración ambiental del Canal del Dique).

Cuadro. Ejecución 2026 (corte 10 de septiembre) y reto 2027 – ANI

CONCEPTO	Apropiación	Compromisos	Obligaciones
Total 2026	$10,60 billones	$6,84 bill. (64,6 %)	$1,19 bill. (11,2 %)

CONCEPTO	Apropiación	Compromisos	Obligaciones
Inversión 2026	$7,73 billones	84,9 %	14,6 %
Necesidad inversión 2027	$13,71 billones	—	—
Proyecto PGN 2027	$8,13 billones (59 %)	—	—
Déficit de inversión	**$5,5 billones**	—	—

Fuente: intervención de la Agencia Nacional de Infraestructura, sesión del 14 de septiembre de 2026.

El déficit de $5,5 billones se compone de $2 billones en vigencias futuras de 22 APP de concesiones carreteras, $681.000 millones del Canal del Dique y $2,1 billones en obras complementarias de 17 proyectos (seguridad vial, puntos críticos, puentes y obras de protección).

Servicio de la deuda: la entidad estima $17,79 billones para 2027 frente a los $2,49 billones contemplados en el proyecto de ley, una diferencia de $15,3 billones. Para atender esta situación, la ANI propone modificar el artículo 60 del proyecto de PGN 2027 con el fin de ampliar el cupo de TES.

Como enfoque de gestión se planteó priorizar proyecto por proyecto (crítico, estratégico, necesario y diferible), proteger los compromisos cuya desatención genera mayores costos y contingencias, reprogramar vigencias futuras con los concesionarios mediante modificaciones contractuales y trámite ante el CONFIS, y concertar con el Ministerio de Hacienda la inclusión en el PAC de los recursos del déficit de 2025 y 2026. Se destacó como asunto neurálgico la existencia de tribunales de arbitramento y amigables composiciones con pretensiones billonarias, frente a los cuales se adelantó una mesa de trabajo con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

4. SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS DE LOS CONGRESISTAS

En desarrollo de la sesión, los senadores citantes y los demás miembros de la Comisión formularon las siguientes solicitudes, requerimientos de información y constancias, cuyo traslado a las Comisiones Económicas Terceras y Cuartas constituye objeto principal del presente informe.

4.1. Senadora María Irma Noreña Arboleda (citante)

Precisó que el objeto de la sesión era recopilar la información de las carteras para remitir el informe a las Comisiones Terceras y Cuartas en cumplimiento del artículo 4º de la Ley 3ª de 1992. Sus solicitudes concretas fueron:

- **Reactivación económica de las zonas afectadas por el terremoto.** Concentrar los instrumentos del sector comercio en capital semilla y reactivación de la agenda de Fontur, con mención expresa del ecoparque El Vergel en Risaralda y de los pueblos mágicos del Quindío y del norte del Valle del Cauca (Roldanillo).
- **Medidas tributarias para el Eje Cafetero.** Exención de IVA en tiquetes aéreos (trayectos sencillos entre $1.100.000 y $1.200.000), revisión del IVA en el sector hotelero y del impuesto al consumo en bares y restaurantes.

- **Mesa especial para Risaralda.** Solicitó formalmente la instalación de una mesa de trabajo para Pereira y Dosquebradas, sosteniendo que, pese a que el epicentro fue San José del Palmar (Chocó), Pereira es proporcionalmente la ciudad más afectada (más de 120.000 damnificados, más de 36.000 infraestructuras afectadas y cerca de 100 establecimientos comerciales sin reabrir, incluida la zona comercial de la Circunvalar) y que las intervenciones del Gobierno iniciaron por los territorios menos golpeados.
- **Ejecución del sector Defensa.** Advirtió que más de 33 proyectos se encuentran por debajo del 10 % de ejecución y pidió atender las estaciones de policía y clínicas afectadas, con énfasis en la estación de Pereira, por su efecto sobre la percepción de seguridad.
- **Seguros e implosiones controladas.** Solicitó atención prioritaria a los seguros de los bienes inmuebles afectados y el apoyo del Ministerio de Defensa con los insumos para implosiones controladas en las zonas del sismo, dado que el Fondo Milagro asumiría la contratación pero los insumos dependen de esa cartera, y que las edificaciones inestables mantienen manzanas cerradas.
- **Migración Colombia.** Pidió la recuperación de las sedes de migración afectadas en el Eje Cafetero, en particular la de Pereira.
- **Cancillería.** Solicitó repensar los recursos destinados a migrantes que desean retornar a sus países de origen, dado el déficit habitacional en las zonas afectadas, y mayor eficiencia y eficacia de las embajadas en promoción del país, turismo y revisión de tratados.

4.2. Senador Antonio José Correa Jiménez (citante)

El senador Antonio José Correa Jiménez manifestó que el análisis del Presupuesto General de la Nación para 2027 no puede limitarse a comparar las cifras solicitadas por las entidades con los montos asignados por el Ministerio de Hacienda. En su condición de miembro de la bancada del partido de la U, sostuvo que el control político debe ejercerse con responsabilidad fiscal, rigor técnico y sentido social: sin aprobar adiciones generales o bolsas presupuestales sin destinación, pero garantizando los recursos necesarios para proteger la seguridad nacional, la atención a los ciudadanos, la Fuerza Pública, las fronteras y la infraestructura estratégica.

Advirtió que la aprobación del monto global del PGN no agota la discusión presupuestal. Corresponde al Congreso examinar la composición de las apropiaciones, establecer qué recursos se encuentran comprometidos, identificar las reducciones reales y exigir que cada modificación señale la entidad, el programa, el proyecto, la fuente de financiación, la meta física y el resultado esperado.

Relaciones Exteriores y coordinación de la cooperación internacional

Como solicitud central, propuso incluir dentro del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores una partida específica para coordinar la cooperación internacional recibida con ocasión del terremoto del 10 de agosto de 2026.

También solicitó la creación de una dependencia o mecanismo institucional especializado que consolide la información relacionada con la ayuda internacional y administre un registro público que permita identificar:

- País, organismo internacional o entidad donante.
- Valor económico o naturaleza de la donación.
- Entidad nacional o territorial receptora.
- Departamento y municipio beneficiario.
- Fecha de recepción.
- Estado de entrega.
- Destinación final de los recursos o bienes.
- Población efectivamente atendida.

Esta dependencia deberá rendir un primer informe a la Comisión Segunda dentro de los tres meses siguientes a su puesta en funcionamiento y publicar actualizaciones periódicas que permitan ejercer control político y ciudadano sobre la recepción, distribución y utilización de las ayudas.

El senador señaló que la solidaridad internacional no puede gestionarse mediante información dispersa entre entidades. El país necesita un sistema de trazabilidad que impida la pérdida, duplicidad, concentración territorial injustificada o utilización inadecuada de las donaciones.

Frente al presupuesto ordinario del sector Relaciones Exteriores, formuló los siguientes requerimientos:

- Desagregar los recursos asignados al Ministerio, al Fondo Rotatorio y a Migración Colombia, evitando presentar como una sola cifra apropiaciones que tienen naturaleza y finalidades distintas.
- Informar la asignación presupuestal por embajada, consulado, misión y región consular, indicando la ejecución de 2026 y los recursos previstos para 2027.
- Identificar los ingresos propios obtenidos por expedición de pasaportes, apostillas, trámites consulares y demás servicios, así como su recaudo, disponibilidad y destinación.
- Explicar los proyectos que concentran el 74,32 % de los recursos destinados a infraestructura, tecnología y servicios consulares.
- Presentar una evaluación de carga laboral de los 3.051 cargos de planta, discriminada por embajada, consulado y misión, con indicadores de trámites, población atendida y tiempos de respuesta.
- Justificar técnica y financieramente los $58.800 millones destinados a membresías y contribuciones ante organismos internacionales, señalando los beneficios concretos obtenidos por el país.

- Presentar indicadores verificables sobre tiempos de atención, trámites digitalizados, cobertura de emergencias consulares y servicios prestados a los colombianos en el exterior.
- Explicar la naturaleza, recurrencia y disponibilidad jurídica de los recursos de capital del Fondo Rotatorio, diferenciando saldos, rendimientos, recuperaciones y demás fuentes extraordinarias.

El senador advirtió que la reducción del presupuesto de la Cancillería y del Fondo Rotatorio no puede evaluarse únicamente mediante un porcentaje general. El Gobierno debe informar qué servicios absorberán el ajuste y si este puede afectar la atención consular, la seguridad de las sedes, el personal local, los arrendamientos indispensables o la infraestructura tecnológica.

Defensa Nacional y Fuerza Pública

En relación con el sector Defensa, el senador solicitó que el Ministerio precise el alcance de las cifras presentadas, debido a que el informe utiliza montos diferentes para el Ministerio, las unidades centralizadas y el sector consolidado. Esta distinción es necesaria para evitar que las obligaciones prestacionales, las asignaciones de retiro y los recursos de entidades descentralizadas se contabilicen como nuevas capacidades militares o policiales.

Formuló los siguientes requerimientos:

- Informar las incorporaciones proyectadas para 2027 y su costo integral, incluyendo formación, salarios, prestaciones, salud, pensión, dotación y vigencias futuras.
- Desagregar los $5,68 billones previstos para inversión y los aproximadamente $5,44 billones correspondientes al programa 1502, indicando cuánto corresponde a obligaciones contractuales y vigencias futuras ya comprometidas, mantenimiento mayor, reposición de equipos y capacidades verdaderamente nuevas.
- Precisar los recursos destinados a drones, sistemas antidrones, inteligencia artificial, ciberdefensa, ciberseguridad, movilidad aérea y terrestre, infraestructura y comunicaciones.
- Informar el monto destinado exclusivamente a armas y municiones y su distribución entre el Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.
- Identificar la meta física, el cronograma de contratación y la fecha de entrada en operación de cada capacidad estratégica.

El senador sostuvo que el crecimiento global del presupuesto del Ministerio de Defensa no demuestra, por sí solo, que todas las necesidades operacionales se encuentren financiadas. Sin embargo, tampoco resulta procedente aprobar una adición general mientras existan más de treinta proyectos con bajos niveles de ejecución y no se hayan determinado las causas de su rezago, teniendo en cuenta que existe un déficit de $40 billones.

Por lo anterior, propuso que las modificaciones se concentren en proyectos específicos y en brechas comprobadas. Toda adición deberá señalar su destinación, fuente de financiación, capacidad financiada, cronograma de ejecución y resultado operacional esperado.

Policía Nacional vivienda y bienestar

Respecto de la Policía Nacional, solicitó certificar la apropiación vigente y la ejecución de los programas 1501, 1505 y 1599, diferenciando funcionamiento e inversión. Advirtió que la elevada participación del funcionamiento puede absorber el crecimiento nominal del presupuesto sin traducirse en mayores capacidades de movilidad, infraestructura, tecnología, comunicaciones, protección y bienestar.

Requirió informar el presupuesto destinado a vivienda policial durante 2027, la cobertura de los programas existentes y la viabilidad de desarrollar ciudadelas policiales en ciudades y regiones afectadas por la violencia urbana y el conflicto armado. Esta propuesta deberá incluir identificación de predios, costo por solución, fuentes de financiación, número de hogares beneficiarios y mecanismos de ejecución.

Como autor de iniciativas legislativas relacionadas con bienestar, educación, vivienda y salud de la Fuerza Pública, señaló que no resulta coherente reconocer beneficios mediante la ley sin garantizar los recursos necesarios para su materialización. Los integrantes de la Fuerza Pública son servidores públicos sometidos a riesgos y restricciones especiales, por lo que el Estado debe asegurar condiciones dignas para ellos y sus familias.

El senador llamó especialmente la atención sobre los recursos descontados al personal policial en aplicación del artículo 128 de la Ley 2179 de 2021. Esta disposición establece que al personal del Nivel Ejecutivo y a los patrulleros se les descuente de la prima de vacaciones el equivalente a tres días de asignación básica para financiar su bienestar y el de sus beneficiarios.

De acuerdo con la información conocida por el despacho, no se evidencia una subcuenta denominada "Aportes del personal" que permita identificar separadamente el recaudo, la incorporación, los compromisos, las obligaciones, los pagos y los saldos derivados de estos descuentos. La ausencia de esta trazabilidad impide establecer con claridad cuánto han aportado los policías, en qué programas se ha invertido ese dinero y cuáles han sido los beneficiarios.

Por esta razón, propuso crear un fondo-cuenta o un esquema presupuestal y contable con subcuentas diferenciadas que permita registrar separadamente:

- Los aportes descontados al personal en aplicación del artículo 128 de la Ley 2179 de 2021.
- Los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación destinados al bienestar de la Policía Nacional.
- Los aportes públicos destinados a educación, salud, vivienda y bienestar de los integrantes de las Fuerzas Militares.

Las fuentes deberán conservar su naturaleza y destinación, pero integrarse en un sistema de información que permita realizar seguimiento y exigir rendición de cuentas. La Policía Nacional deberá certificar, desde la entrada en vigencia de la Ley 2179 de 2021, los valores descontados anualmente, los rendimientos, la ejecución, los saldos, los programas financiados y la población beneficiaria.

Sanidad militar y policial

El senador manifestó preocupación por el crecimiento de la deuda del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, que pasó de aproximadamente $200.000 millones en 2022 a cerca de $960.000 millones en 2026 y atiende alrededor de 1.200.000 beneficiarios.

Consideró necesario sanear las obligaciones auditadas y reconocidas, pero advirtió que una operación de saneamiento no resolverá el problema si no se corrigen las causas estructurales que generan nuevamente la cartera. En consecuencia, solicitó información sobre suficiencia de la unidad de pago, oportunidad de los giros, costos de prestación, contratación de la red, auditorías, cuentas glosadas y obligaciones pendientes.

También propuso que cualquier mecanismo de saneamiento excluya cuentas prescritas, servicios no prestados u obligaciones que no hayan sido auditadas y reconocidas.

CREMIL CASUR y entidades logísticas

El senador solicitó que los recursos de CREMIL y CASUR sean presentados separadamente de las capacidades militares y policiales activas, debido a que financian principalmente asignaciones de retiro y obligaciones prestacionales.

En el caso de CASUR, requirió explicar la diferencia aproximada de $15.608 millones entre la apropiación general y el Anexo de Gasto Social, y verificar que los recursos clasificados como inversión se destinen efectivamente a activos o modernización institucional.

También solicitó al Fondo Rotatorio de la Policía identificar el costo anual de operación de las cinco embarcaciones recibidas mediante cooperación internacional, discriminando combustible, mantenimiento, repuestos, seguros, comunicaciones, tripulación y logística.

A la Agencia Logística de las Fuerzas Militares le requirió informar los galones de combustible y suministros entregados en 2026, los precios previstos para 2027, el volumen que podrá financiarse y el estado de la facturación, el recaudo y la cartera por entidad pagadora.

Migración Colombia y fronteras

El senador advirtió que el crecimiento del presupuesto total de Migración Colombia contrasta con la reducción de su inversión. Solicitó conciliar la cifra base de 2026 y desagregar la inversión de 2027 por proyecto BPIN, identificando los recursos destinados a

BIOMIG, servidores, licencias, respaldo de datos, interoperabilidad, soporte y ciberseguridad.

Las solicitudes para ampliar la planta y modernizar la tecnología deberán acompañarse de metas sobre cargos provistos, disminución de tiempos de espera, disponibilidad de los sistemas y capacidad de procesamiento de viajeros.

En materia fronteriza, pidió una matriz intersectorial que consolide los recursos de Cancillería, Migración Colombia, DIAN, Transporte, TIC, entidades territoriales y cooperación internacional. También respaldó la incorporación de recursos para la pervivencia de los pueblos indígenas cuyos territorios ancestrales trascienden las fronteras nacionales.

Comercio exterior e infraestructura estratégica

El senador sostuvo que los recursos de internacionalización deben evaluarse mediante exportaciones efectivamente materializadas, inversión extranjera realmente ingresada, mercados habilitados y empleos generados. Las reuniones, anuncios y expectativas de negocio no constituyen por sí solos resultados suficientes.

Solicitó que el Ministerio de Comercio desagregue las transferencias destinadas a ProColombia, iNNpulsa, FONTUR, Bancóldex, Artesanías de Colombia y demás instrumentos, identificando saldos utilizables, rendimientos, costos fiduciarios, obligaciones previas y recursos netos disponibles para la misión.

En materia portuaria, recomendó que las decisiones se adopten por nodo y por cuello de botella demostrado, conciliando contraprestaciones, inversión pública y privada, calado, restricciones operacionales, carga movilizada y obras pendientes.

Satena y entidades del GSED

Finalmente, solicitó información detallada sobre la situación financiera y operacional de Satena, incluyendo ingresos, costos operacionales, transferencias recibidas, rutas sociales, ocupación, obligaciones pendientes, flota disponible y necesidades de capitalización. La respuesta deberá ser presentada por la dirección de la empresa y articulada con la información financiera del Grupo Social y Empresarial de la Defensa.

El senador respaldó la instalación de una mesa especial para Risaralda, con fecha definida y participación de la senadora citante, iNNpulsa, Artesanías de Colombia y FONTUR. Igualmente, dejó constancia formal sobre la inasistencia del Ministro de Hacienda, debido a que su ausencia impidió contrastar durante la sesión las solicitudes de las entidades con la disponibilidad fiscal y las fuentes de financiación del proyecto.

Como conclusión, solicitó que estas observaciones sean trasladadas a los coordinadores ponentes y a las Comisiones Terceras y Cuartas, para que sean consideradas en la

discusión de las apropiaciones y en la elaboración de la ponencia para primer debate del Presupuesto General de la Nación para 2027.

4.3. Senador Honorio Miguel Henríquez Pinedo, Presidente del Senado de la República

- Señaló que la diferencia entre lo solicitado por el sector Defensa ($115 billones) y lo asignado ($74,8 billones) arroja un déficit cercano a $41 billones.
- Advirtió ejecución del 0 % en ciberdefensa, en infraestructura del comando del Gaula y en prevención y atención de desastres.
- Anunció que radicará una proposición de aumento de $15 billones para el sector defensa, que fue suscrita por otros congresistas de la comisión, proposición que surge del estudio del sector donde se encuentra que el Ministerio de Defensa para el 2027, presenta un presupuesto con un déficit por valor de **$37,8 billones**, de los cuales, solicita un presupuesto exclusivo para inversión por valor de $21,4 billones frente a lo destinado para el Proyecto de Ley 2027 por valor de $6,39 Billones, lo cual les genera un déficit de $15,0 billones. Las necesidades y prioridades específicas que configuran ese déficit ($15,0 billones) en el Ministerio de Defensa para 2027, se agruparía en tres (3) grandes frentes estratégicos:

  1. la recuperación de la movilidad
  2. la renovación de armamento convencional y
  3. la seguridad urbana acompañada de la seguridad tecnológica.

- Advierte y deja constancia que de la revisión de la ejecución presupuestal de inversión de la presente vigencia, la cual a Junio 30 de 2026, mantiene proyectos en estado de rezago o parálisis de ejecución, frente a prioridades que el nuevo gobierno está demandando en materia de seguridad.
- En el Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027, el Sector Defensa y Policía Nacional tiene proyectado una asignación de $54 billones, lo cual queda por debajo frente a sus necesidades de funcionamiento y prioridades de inversión asignados en el 2026 por $65,7 billones. Por tanto, se debe tener en cuenta la pérdida de poder adquisitivo que ha tenido el Sector Defensa en estos últimos 4 años, debido a que el incremento en su presupuesto no ha crecido de manera proporcional al aumento presupuestal requerido, lo cual degrada su capacidad operativa real y el mantenimiento logístico de su pie de fuerza.
- Destaca la necesidad estratégica, alineada con la actual realidad de seguridad del país, requiere mayor inversión para la modernización tecnológica contra la amenaza actual, por lo cual, se deben generar recursos adicionales para la adquisición de sistemas de defensa anti drones, renovación de equipos, vehículos operativos, aeronaves de transporte y equipos especializados de ciberdefensa.

Respecto del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, el Senador Honorio Henriquez, llama la atención del déficit para 2027 de este sector en $69 mil millones (solo

ministerio) y $900 mil millones Todo el sector: Ministerio + Fondo Rotatorio + Migración Colombia, lo cual verá afectados los siguientes programas:

- Financiación de la planta de 3.511 cargos de diplomáticos y funcionarios.
- $815,1 mil millones menos para funcionamiento de sedes y misiones diplomáticas y consulados.
- Atención de los colombianos en el exterior.
- Política exterior y presencia diplomática.
- Actividades de promoción internacional.
- Capacidad institucional para atender compromisos y misiones internacionales.

En el PGN radicado por el gobierno saliente, el sector había solicitado $71 mil millones de más ($839 mil millones), este fue devuelto por este congreso, y ahora, el nuevo gobierno, radica con una asignación de $699 mil millones para el Ministerio de Relaciones Exteriores, se comprende la política de austeridad y reducción de la burocracia, lo cual, confiamos, se verá reflejado, con el buen manejo de las finanzas y transparencia en la inversión de los recursos que haga este gobierno, en más beneficios sociales y aumento del presupuesto en otros sectores en favor de la población.

Sea esta la oportunidad para resaltar la importancia, sobre todo en estos momentos, que requiere la promoción internacional de nuestro país, lo cual redunda en atracción de inversionistas y ello afecta de manera positiva, directa e indirectamente, la generación de empleo, crecimiento, productividad y aumento de la competitividad de nuestro país.

Sobre el Monto Solicitado por MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO de $859.097 millones y el monto Asignado: $1,2 billones, aplaude el aumento del 41,5 %, que representa un incremento de $357.000 millones para este sector lo cual redundará en beneficios para los siguientes programas:

- $804,2 mil millones para FONTUR, destinados a proyectos de infraestructura turística.
- $42,3 mil millones para Artesanías de Colombia.
- $28,5 mil millones para apoyo a las MIPYMES.
- $61 mil millones para capitalización de las Salinas de Manaure.
- $35,4 mil millones para fortalecimiento de capacidades empresariales.
- $25 mil millones para política de industria, competitividad y productividad.
- $25 mil millones para acceso a mercados y comercialización de unidades productivas de víctimas.
- $19 mil millones para facilitación del comercio exterior y transformación digital.

Este aumento es relevante para lograr un aumento en las exportaciones, industria, turismo y MIPYMES. Orientar la política exterior y los recursos, hacia una diplomacia que contribuya directamente a generar oportunidades para nuestros empresarios, productores y trabajadores es una sabia decisión.

Consideramos acertada la decisión del Gobierno Nacional de reactivar las exportaciones de carbón colombiano hacia Israel, recuperando una relación comercial que había sido

suspendida en 2024, más aún si logramos duplicar las buenas cifras que teníamos entre 2022 y 2024 más de 15 millones de toneladas de carbón exportado equivalente a $1.672 millones de dólares. Esta decisión representa una oportunidad de recuperar entre 250 y 440 millones de dólares anuales en exportaciones, equivalentes aproximadamente a entre $1 y $1,8 billones de pesos, además de generar regalías, empleo y actividad económica para las regiones productoras.

Colombia necesita comerciar con el mundo, sin dejar de defender sus intereses nacionales, aprovechando todos los mercados posibles dentro del derecho internacional, estamos seguros de que estas decisiones se verán reflejadas en productividad, competitividad, más empleo formal y beneficios sociales para el País.

Estamos prestos a desarrollar de manera conjunta, a través de la Cancillería, el Ministerio de Comercio y ProColombia, un Plan Nacional de Diplomacia Comercial 2026–2030, con metas anuales de nuevos mercados, crecimiento de exportaciones no minero-energéticas, atracción de inversión extranjera y generación de empleo, especialmente para las regiones.

La política exterior debe producir resultados concretos para los colombianos. Abrir nuevos mercados, negociaciones que aumenten nuestras exportaciones y una inversión extranjera que genera empleo también son instrumentos de desarrollo nacional.

Colombia debe volver a mirar al mundo no solamente para pedir cooperación, sino también para ofrecer productos, atraer inversión y defender sus intereses.

Por último, destaca el senador HONORIO HENRIQUEZ que el monto asignado para el MINISTERIO DEL TRANSPORTE en 2027 es de, solo ministerio: $398.736 millones, frente a un monto solicitado (todo el sector) de $21,6 billones, lo cual implica un déficit para el 202 de: Solo ministerio:$19.233 millones y para todo el sector de $5 billones, lo cual puede ver afectados los siguientes programas:

- Concesiones 4G y 5G.
- Infraestructura vial nacional y regional.
- Proyectos férreos.
- Infraestructura fluvial y navegabilidad.
- Infraestructura aeroportuaria.
- Caminos y corredores estratégicos.
- Pagos de vigencias futuras de la AN

Si bien se destinan recursos importantes a infraestructura vial primaria, transporte fluvial, aéreo, regional, férreo y marítimo, no es suficiente, por lo que se invita al gobierno nacional a incrementar su disponibilidad presupuestal para el sector transporte, y con un trabajo consensuado con el sector privado y a través de las concesiones viales, para así lograr el desarrollo vial que necesita nuestro país, con esto le facilitaremos a los campesinos sacar sus productos, a los colombianos transitar por todo el país, y proyectar el turismo terrestre.

Recordemos la importancia de:

- Implementar el transporte intermodal: Articular de forma eficiente el transporte férreo, fluvial, marítimo, aéreo y terrestre mediante decretos de modernización

logística. Esto reduce los costos logísticos del país, facilita el traslado de carga a nivel nacional e internacional y optimiza los tiempos de entrega.

- Reactivar la red férrea y fluvial: Impulsar proyectos como el Corredor Férreo Central y la navegabilidad por los ríos principales.Así se descongestiona las carreteras principales, disminuye la huella de carbono y abarata los costos de transporte de carga pesada a largas distancias.
- La Sostenibilidad financiera del transporte público urbano: Hay que crear nuevos modelos de financiación y subsidios administrados con apoyo del Departamento Nacional de Planeación (DNP) para aliviar el déficit de los sistemas masivos. Así evitamos alzas drásticas en las tarifas que pagan los hogares, mejoramos la calidad del servicio y prevenimos la quiebra de los operadores.

4.4. Senador Germán Andrés Rodríguez

El senador presentó una proposición dirigida a sanear la cartera acumulada del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Invocó como precedente la fórmula de saneamiento aplicada en el Presupuesto General de la Nación de 2021. En su intervención señaló una deuda acumulada de $960.000 millones y un déficit consolidado de $635.000 millones, equivalente al 13 % de las necesidades reales del sistema, que atiende a cerca de 1.200.000 beneficiarios.

La iniciativa se aprobó como Proposición N.° 10 de 2026 en la sesión de la Comisión Segunda del 15 de septiembre de 2026. La Secretaría de la Comisión la remitió a la subcomisión mediante el oficio CSE-CS-04140-2026 del 17 de septiembre de 2026, para que se incorpore en el presente informe.

La proposición recomienda a las Comisiones Terceras y Cuartas Constitucionales Permanentes, reunidas conjuntamente, evaluar e incorporar un artículo nuevo en el capítulo de Disposiciones Generales del Proyecto de Ley No. 152 de 2026 Cámara – 111 de 2026 Senado. Esta incorporación estaría sujeta al cumplimiento previo de los requisitos constitucionales, orgánicos y fiscales aplicables. El artículo propuesto contempla lo siguiente:

- **Reconocimiento como deuda pública**: Las cuentas por pagar con las IPS y demás prestadores podrían sanearse mediante su reconocimiento como deuda pública. Aplicaría a las cuentas causadas hasta el cierre de la vigencia 2026 por servicios y tecnologías en salud efectivamente prestados, siempre que estén reconocidas, auditadas y registradas como pasivo en la contabilidad de los subsistemas. Su pago se haría con cargo al servicio de la deuda del PGN o mediante operaciones presupuestales y de crédito público procedentes, según la disponibilidad fiscal y las condiciones que defina el Gobierno nacional.
- **Mecanismos abreviados de saneamiento en 2027**: Se autorizaría a la Dirección General de Sanidad Militar y a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional a implementar durante 2027 mecanismos abreviados de saneamiento de cartera, cruces de cuentas y convenios de pago sobre obligaciones auditadas. Estos se financiarán con sus apropiaciones ordinarias y con los recursos del Fondo de Solidaridad del Subsistema.

- **Salvaguardas (Parágrafo 1)**. Se excluye el reconocimiento de obligaciones que no correspondan a servicios efectivamente prestados, que estén prescritas o que no hayan surtido auditoría y reconocimiento.
- **Reglamentación (Parágrafo 2)**. Los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Defensa Nacional fijarían los términos, condiciones y requisitos técnicos, presupuestales y procedimentales para su aplicación durante la vigencia 2027.

4.5. Senadora Jennifer Pedraza Sandoval

- Preguntó por la articulación del sector Defensa con la estrategia nacional de lucha contra la trata de personas.
- Respaldó un presupuesto digno para el sector Defensa, condicionado al respeto del Derecho Internacional Humanitario y a los principios de distinción, proporcionalidad y legalidad.
- Consultó a Migración Colombia sobre iniciativas de regularización o protección temporal para población migrante, en particular venezolana; la entidad respondió que se limita a aplicar el marco jurídico vigente y no se pronunció sobre una eventual reedición del Estatuto Temporal de Protección.
- Solicitó al Ministerio de Comercio evaluar la importación de azúcar y etanol desde Bolivia y la solicitud de salvaguardia, así como la revisión integral de los acuerdos comerciales; el Ministerio se comprometió a convocar el comité de asuntos aduaneros y a presentar dicha revisión a esta corporación. En turismo, el Ministerio acogió el enfoque de turismo comunitario.
- Dejó constancia de rechazo a las declaraciones del Presidente de la República sobre la intervención de la fuerza pública en los campus universitarios, por considerar que desconoce la autonomía universitaria, no resuelve los focos de violencia, estigmatiza a la universidad pública y pone en riesgo la vida de estudiantes, docentes y trabajadores.

4.6. Senador Jesús Homero Cuasaputt

Planteó la situación de los pueblos indígenas cuyos territorios ancestrales trascienden las fronteras nacionales (wayú, pastos y quillacingas, entre otros) y expresó preocupación por una inversión de cero en el proyecto de presupuesto para la pervivencia de dichos pueblos, solicitando que la Comisión traslade proposiciones sobre la materia a las Comisiones Económicas.

4.7. Senador Luis Alfonso Mejia (Presidente de la Comisión Segunda)

El presidente de la Comisión Segunda del Senado, Luis Alfonso Mejía Núñez, manifiesta que:

«Tras la aprobación en las Comisiones Económicas Conjuntas del monto global del Presupuesto General de la Nación para el año 2027 por la cifra de $634,9 billones, la responsabilidad del Congreso de la República no puede limitarse a un trámite puramente cuantitativo sobre los techos macroeconómicos. Una vez definido el marco general —donde

la inversión pública nacional asciende a $86,9 billones, mientras los gastos de funcionamiento absorben $392,5 billones y el servicio de la deuda exige $155,4 billones—, el verdadero debate ético y constitucional radica en la calidad, la oportunidad y la focalización territorial de cada peso asignado.

En su condición de presidente de la Comisión Segunda, celosa de la seguridad nacional, las relaciones internacionales y la fuerza pública, el senador Luis Alfonso Mejía expresa su profunda alarma por la grave vulnerabilidad de Norte de Santander. Tras el reciente periodo de transición de gobiernos y las reestructuraciones institucionales iniciadas el pasado mes de agosto, el departamento enfrenta una escalada violenta sin precedentes. La confrontación armada, históricamente replegada en las zonas rurales del Catatumbo, ha mutado drásticamente: hoy los atentados de gran magnitud, las extorsiones y el accionar de grupos al margen de la ley han penetrado con fuerza los cascos urbanos del área metropolitana de Cúcuta y municipios fronterizos como Villa del Rosario y Los Patios.

Ante este dramático panorama, el congresista exige a las Comisiones Económicas un riguroso examen sobre las partidas asignadas al Sector Defensa y Seguridad. No basta con destinar recursos genéricos a la Fuerza Pública; el presupuesto para 2027 debe garantizar un blindaje financiero específico para la modernización de la inteligencia estratégica, el fortalecimiento tecnológico de monitoreo, el incremento del pie de fuerza y la capacidad operativa de respuesta rápida en la frontera.

Asimismo, el senador Mejía recalca que la fuerza militar y policial es condición necesaria pero no suficiente. La soberanía se defiende con botas, pero se consolida con presencia estatal integral. Es indispensable coordinar las partidas de seguridad con inversión social directa en infraestructura vial, desarrollo rural e instituciones de justicia dentro de las zonas de conflicto armado. Llegar a los ciudadanos con protección y oportunidades reales es la única fórmula sólida para arrancar a las comunidades del yugo de la criminalidad organizada y garantizar que el Presupuesto General de la Nación de 2027 responda con efectividad a la crisis que padecen los nortesantandereanos.»

5. CONSOLIDADO DE DÉFICIT Y SOLICITUDES DE ADICIÓN

Cuadro. Solicitudes de adición presentadas por los sectores de la Comisión Segunda

SECTOR / ENTIDAD	SOLICITUD DE ADICIÓN	OBJETO PRINCIPAL
Relaciones Exteriores	No solicita adición	Ajuste al techo de gasto; equilibrio del Fondo Rotatorio vía tarifas
Migración Colombia	$48.259 mill. (planta) + $122.000 mill. (tecnología)	Planta de personal y renovación tecnológica (BIOMIG)
Defensa y Policía	$3,7 billones (déficit priorizado)	Funcionamiento, inversión ordinaria y afectaciones del terremoto
Comercio, Industria y Turismo	$400.000 millones	Reactivación empresarial y turística en zonas del sismo
DIAN	$788.000 millones	Planta, modernización y reconstrucción de seccionales
ANI – Transporte	$5,5 billones (inversión) + $15,3 billones (deuda)	Vigencias futuras APP, Canal del Dique y obras complementarias

Fuente: elaboración propia con base en las intervenciones de la sesión del 14 de septiembre de 2026.

6. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS DE LA COMISIÓN

- **Inflexibilidad del gasto y pérdida de capacidad real.** En los sectores de competencia de esta Comisión el gasto de personal absorbe entre el 78 % y el 97 % de las apropiaciones (Defensa 78 %, Cancillería entre 90 % y 97 %, DIAN más del 85 % del funcionamiento). El crecimiento nominal del presupuesto no se traduce en capacidad operativa: en Defensa, el incremento del 121 % entre 2018 y 2026 en precios corrientes equivale apenas a 36 % en precios constantes, y las horas de vuelo cayeron 47 % en una década.
- **Desproporción entre la amenaza y los recursos.** Mientras el sector Defensa representa cerca del 3,3 % del PIB, las rentas criminales equivalen al 4,08 % del PIB. La brecha entre la necesidad estructural ($115 billones) y lo asignado ($74,8 billones) asciende a $41 billones, y rubros críticos como ciberdefensa, infraestructura del comando del Gaula y prevención y atención de desastres presentan 0 % de ejecución.
- **Baja ejecución como indicador de alerta.** Se identificaron más de 33 proyectos del sector Defensa por debajo del 10 % de ejecución y, en la ANI, obligaciones de apenas 11,2 % sobre una apropiación de $10,6 billones al 10 de septiembre. Esta Comisión solicita que las Comisiones Económicas examinen estos indicadores antes de decidir sobre las adiciones y los recortes.
- **Efecto transversal del terremoto del 10 de agosto de 2026.** La emergencia atraviesa todas las carteras de la Comisión: Defensa reportó 561 afectaciones por $285.285 millones; Migración Colombia perdió la sede de Pereira; la DIAN reportó el colapso de la dirección seccional de Pereira y daños en Cali, Manizales, Buenaventura y Quibdó; y Comercio identificó que el 24,7 % de 45.000 unidades empresariales caracterizadas no puede operar. No obstante, el proyecto de presupuesto no incorpora una partida diferenciada que reconozca estos costos.
- **Focalización territorial de la reconstrucción.** Se dejó constancia de que, aunque el epicentro fue San José del Palmar (Chocó), Pereira es proporcionalmente la ciudad más afectada (más de 120.000 damnificados, más de 36.000 infraestructuras afectadas y cerca de 100 establecimientos comerciales que no han podido reabrir, incluida la zona comercial de la Circunvalar) y que las intervenciones del Gobierno iniciaron por territorios menos golpeados.
- **Debilidad de la información remitida.** Los informes escritos de las carteras fueron enviados la noche anterior a la sesión y el Ministerio de Hacienda no compareció ni delegó, lo que impidió contrastar las solicitudes sectoriales con la disponibilidad fiscal. Varias entidades quedaron comprometidas a remitir respuestas escritas que, a la fecha de este informe, deben ser incorporadas como anexo.

7. RECOMENDACIONES A LAS COMISIONES ECONÓMICAS CONJUNTAS

Con fundamento en lo expuesto, la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República formula las siguientes recomendaciones y traslada las siguientes proposiciones para su consideración en el trámite del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2027:

- **Medidas tributarias para la reactivación del Eje Cafetero.** Trasladar a las Comisiones Económicas y al Ministerio de Hacienda la solicitud de la Senadora María Irma Noreña de evaluar la exención de IVA en tiquetes aéreos del Eje Cafetero (se reportaron trayectos sencillos entre $1.100.000 y $1.200.000), el IVA en el sector hotelero y el impuesto al consumo en bares y restaurantes de las zonas afectadas, advirtiendo que estas medidas requieren iniciativa legislativa independiente y estimación de costo fiscal.
- **Mesa especial para Risaralda.** Dejar constancia del compromiso del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de instalar una mesa de trabajo específica para Risaralda (Pereira y Dosquebradas), con participación de Impulsa, Artesanías de Colombia y Fontur.
- **Adición para la reactivación económica de las zonas del sismo.** Atender la solicitud de $400.000 millones del sector Comercio, Industria y Turismo para garantías de crédito, capital semilla y transferencias directas a mipymes, informales y micronegocios, así como líneas de crédito a través de Bancóldex y el Fondo Nacional de Garantías. Esta Comisión recomienda que la ejecución de dichos recursos dé prioridad a los departamentos de Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca y Chocó, en los que el propio Ministerio concentró la afectación económica de la emergencia, conforme a la solicitud elevada por la senadora María Irma Noreña Arboleda y respaldada por la Comisión, y que la distribución se realice atendiendo a la afectación proporcional de cada territorio y no únicamente a su tamaño relativo.
- **Reconstrucción de la infraestructura institucional afectada.** Incorporar los $50.000 millones solicitados por el sector Defensa para 2027 y los recursos para la reconstrucción de las direcciones seccionales de la DIAN, con prioridad en la de Pereira.
- **Adición al sector Defensa.** Considerar la proposición anunciada por el Presidente del Senado, Honorio Miguel Henriquez, de aumento de $15 billones para el sector defensa, atendiendo al déficit de $41 billones entre lo solicitado y lo asignado, y priorizando ciberdefensa, infraestructura del Gaula y prevención y atención de desastres.
- **Saneamiento del subsistema de salud de las Fuerzas Militares y la Policía.** Acoger la proposición del senador Germán Andrés Rodríguez (suscrita por la senadora Jennifer Pedraza) dirigida a sanear la cartera acumulada del subsistema, hoy en $960.000 millones, con un déficit consolidado de $635.000 millones equivalente al 13 % de las necesidades reales, aplicando el precedente de la fórmula de saneamiento adoptada en el PGN 2021, y vinculando al Ministerio de Salud y a las Comisiones Séptimas.

- **Partida para la coordinación de la ayuda internacional del terremoto.** Incluir en el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores una partida específica destinada a coordinar la cooperación internacional derivada de la emergencia, junto con la creación de una dependencia especializada que lleve un registro público de donaciones (país u organismo donante, valor o naturaleza, entidad receptora, municipio beneficiario, fecha, estado de entrega y destino final) y rinda un primer informe de ejecución a esta Comisión en tres meses. Proposición del senador Antonio José Correa Jiménez.
- **Fortalecimiento de Migración Colombia.** Considerar la adición de $48.259 millones para completar la planta de personal y $122.000 millones para infraestructura tecnológica, e incluir la reconstrucción de la sede de Pereira dentro de los proyectos de inversión del sector.
- **Modificación del artículo 60 del proyecto de ley.** Evaluar la ampliación del cupo de TES solicitada por la Agencia Nacional de Infraestructura, ante la diferencia de $15,3 billones entre el servicio de la deuda estimado ($17,79 billones) y el contemplado en el proyecto ($2,49 billones).
- **Inversión para pueblos ancestrales transfronterizos.** Incluir una partida para la pervivencia de los pueblos indígenas cuyos territorios trascienden las fronteras nacionales, hoy en cero en el proyecto de ley.

En los anteriores términos la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República rinde su informe a las Comisiones Económicas Terceras y Cuartas de Senado y Cámara, para lo de su competencia.

Atentamente,

H.S. MARÍA IRMA NOREÑA ARBOLEDA
Senadora de la República

H.S. ANTONIO JOSÉ CORREA JIMÉNEZ
Senador de la República

H.S. LUIS ALFONSO MEJIA
Senador de la República

H.S. HONORIO HENRÍQUEZ PINEDO
Senador de la República

Comisión Cuarta <comision.cuarta@camara.gov.co>

INFORME COMISION SEGUNDA DEL SENADO AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

1 mensaje

Comision Segunda <comision.segunda@senado.gov.co> 23 de septiembre de 2026 a las 11:29 a.m.
Para: Comision Tercera <comision.tercera@senado.gov.co>, comision.tercera@camara.gov.co, Comisión Cuarta Senado <comision.cuarta@senado.gov.co>, comision.cuarta@camara.gov.co, Sara Jimena Castellanos Rodriguez <sara.castellanos@senado.gov.co>, Diela Liliana Benavides Solarte <diela.benavides@senado.gov.co>, "alfredo.cuello@camara.gov.co" <alfredo.cuello@camara.gov.co>, "alexander.bermudez@camara.gov.co" <alexander.bermudez@camara.gov.co>

Buenos días.

Siguiendo instrucciones del doctor Wladimir Gómez Becerra, Secretario de la Comisión Segunda del Senado y en su calidad de Presidentes de las Comisiones Económicas del Congreso de la República, comedidamente se envía el Informe de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República al Proyecto de Ley No. 111 de 2026 Senado y 152 de 2026 Cámara "POR LA CUAL SE DECRETA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y LEY DE APROPIACIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2027", presentado por la Subcomisión conformada por los HHSS Maria Irma Noreña, Antonio Correa, Luis Alfonso Mejía y Honorio Henriquez.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

--
Cordialmente,

Osiris Guerrero
SENADO DE LA REPÚBLICA
Comisión Segunda Senado
382 42 58
comision.segunda@senado.gov.co

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia- Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.
CONFIDENTIALITY WARNING..

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

INFORME PRESUPUESTO GENERAL 2027 COMISION SEGUNDA.docx-2 (1).pdf
882K

Subir Página
Enviar DAR Hacendado